

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL III

SANDRA A. LANDRAU
TORRES

APELANTE

V.

DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO Y RECURSOS
HUMANOS Y OTROS

APELADO

KLAN202200606

APELACIÓN
procedente del
Tribunal de Primera
Instancia, Sala
Superior de Ponce

Caso Núm.
PO2022CV00919

Sobre:

SALARIOS Y
REPRESALIAS

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2022.

Sandra A. Landrau Torres (señora Landrau Torres o peticionaria) nos solicita que revoquemos la *Sentencia de Paralización* emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) el 13 de julio de 2022. Mediante esta, el foro primario decretó la paralización de los procedimientos por carecer de jurisdicción para la continuación.

Por los fundamentos que esbozamos a continuación *Confirmamos* la Sentencia apelada.

I.

El 12 de abril de 2022 Sandra A. Landrau Torres presentó una *Querrela* contra su patrono el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo), su Secretario Gabriel Maldonado González y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (Estado) junto al Secretario de Justicia Domingo Emmanuelli Hernández. (en adelante y en conjunto, "apelados" o "Gobierno"). En esta reclamó el pago de salarios, alegó represalias y daños,

bajo el procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. En síntesis, alegó que, desde el **15 de abril de 2021**, el Departamento dejó de pagarle su salario, dietas, millaje y beneficios de licencias. Sostuvo, además, que el Departamento mostró represalias en su contra luego de que denunciara la situación ante el Secretario de Justicia. Al respecto indicó que el Departamento le pagaba menos que a otros compañeros que realizaban iguales funciones; que le eliminaron beneficios y licencias; que permitió que funcionarios le tiraran al piso todas las pertenencias que tenía en su escritorio; le impidieron acceso a su oficina; le cambiaron la silla de trabajo por una incómoda y de baja calidad; le negaron computadoras y equipos modernos; refirió además, ser objeto de amenaza, humillación y/o un intento de que renunciara a su trabajo. En vista de lo anterior reclamó una suma de \$206,676.84 por el salario, los beneficios dejados de percibir y sus respectivas penalidades.¹ En su querrela la señora Landrau también acumuló una acción por daños y perjuicios por actos culposos y/o negligentes del Departamento que le ocasionaron angustias mentales y pérdidas económicas, por las que reclamó una indemnización de \$2,000,000.²

El 10 de mayo de 2022, notificada el día siguiente, el foro primario decretó continuar el pleito como uno ordinario³. Entretanto, el 10 de mayo de 2022 el Departamento de Justicia presentó un *Aviso de Injunction Permanente prohibiendo la litigación del caso y sobre el requisito de presentar una solicitud*

¹ Véase, además, hechos en el recurso KLCE2022517.

² *Íd.*

³ En desacuerdo, la señora Landrau Torres acudió a este foro apelativo en la causa KLCE202200517 y el 9 de junio de 2022 este panel determinó denegar la expedición del auto de *Certiorari*. Informa la apelante que recurrió al Tribunal Supremo y el caso está pendiente en dicha curia. (Alegato pág. 3).

de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III. Alegaron que la demanda laboral y de daños y perjuicios instada por la señora Landrau Torres, fue por hechos que ocurrieron el 15 de abril de 2021, que son posteriores a la fecha de la petición de la restructuración de la quiebra del 3 de mayo de 2017.

Adujo que el 18 de enero de 2022, la Juez de Distrito de los Estados Unidos Laura Taylor Swain, dictó en el caso *In re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17BK3283LTS*, un *Confirmation Order*, mediante la cual confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda. Mencionó que el Plan de Ajuste entró en vigor el 15 de marzo de 2022. Agregó que la paralización automática contemplada en el Título III de PROMESA continuó hasta la fecha de efectividad del Plan de Ajuste y más allá de la efectividad de dicho Plan, conforme al *Confirmation Order*. Por tanto, una vez entró en vigor el Plan de Ajuste, el *injunction* permanente del párrafo 59 del *Confirmation Order* se hizo efectivo en esta reclamación. Expresó que el día que entró en efectividad el Plan de Ajuste, la Junta de Supervisión Fiscal presentó el *Notice*, en el que informó el 13 de junio de 2022 como la fecha límite para presentar las solicitudes de pago de las Reclamaciones de Gastos Administrativos, que, de cualificar, será el remedio que tiene disponible en esta etapa.

El 28 de junio de 2022, la señora Landrau Torres presentó su *Oposición a desestimación y/o paralización y solicitud de remedio de vista urgente*. Arguyó, en síntesis, que la deuda reclamada es una de salarios, del año 2021 hasta el presente año 2022, que esta revertida de interés público. Destacó que no le aplicaría las disposiciones de PROMESA, pues esta fue implementada en el año 2017 para deudas anteriores a esa fecha, y no deudas posteriores. Agregó que el *Confirmation Order* no le

afecta, pues de sus primeros párrafos surge que vincula a casos bajo PROMESA. Además, mencionó que es imposible que PROMESA aplique a deudas futuras como la que aquí reclama.

Trabada la controversia, el 15 de julio de 2022 el foro primario dictó la Sentencia que revisamos. En esta paralizó los procedimientos por falta de jurisdicción, a tenor con el *injunction* promulgado en el párrafo 59 del *Confirmation Order*. Sobre este particular el foro primario explicó lo siguiente:

El *Confirmation Order* estableció un *injunction* en su párrafo 59 que está en plena vigencia desde el 15 de marzo de 2022, y cuyo efecto es paralizar los procedimientos de los casos y reclamaciones en contra del deudor presentados posteriores a la petición de restructuración bajo el Título III de PROMESA, a decir el 3 de mayo de 2017, y antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste, a decir el 15 de marzo de 2022.

Agregó el foro lo siguiente:

Y es que, en virtud del *injunction* contemplado en el *Confirmation Order* emitido por el Tribunal de Distrito federal cualquier reclamación en contra del deudor—Estado Libre Asociado—que haya nacido posterior al 3 de mayo de 2017, pero antes del 15 de marzo de 2022, tiene que someter un *administrative expense claim* dentro de la fecha establecida por el *Notice* para que en el procedimiento del Título III ante el Tribunal de Distrito federal se determine la forma en que se atenderá la reclamación conforme al Plan de Ajuste.

Consecuente a la orden de paralización del caso, el TPI instruyó a la demandante de la disponibilidad de someter su reclamación de gastos administrativos ante el Tribunal de Distrito federal.

En desacuerdo con la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, la señora Landrau Torres acude ante este Tribunal e indica que incidió el foro al:

Primero: Al declararse sin jurisdicción y expedir Sentencia de Paralización de los procedimientos.

Segundo: Al interpretar las determinaciones del Tribunal de quiebra y aplicar una paralización del caso.

Tercero: Al declararse sin jurisdicción y expedir Sentencia de Paralización [de] la totalidad de los procedimientos.

La parte apelada presentó su posición en torno al recurso.

Con el beneficio de ambas comparecencias, revisamos.

II.

A.

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, Economic Stability Act (PROMESA) 48 USC sec. 2101 *et seq.* En lo pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó las secciones 362⁴ [1] y 922 del Código Federal de Quiebras en torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y

⁴ ⁵ [1] La sección 362 (a) del Código de Quiebras enumera las circunstancias en que la presentación de una quiebra opera como un "Automatic stay". Esta incluye lo siguiente:

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, applicable to all entities, of –

(1) the commencement or continuation, including the issuance or employment of process, of a judicial, administrative, or other action or proceeding against the **debtor** that was or could have been commenced before the commencement of the case under this title, or to recover a claim against **the debtor** that arose before the commencement of the case under this title;

(2) the enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a judgment obtained before the commencement of the case under this title;

(3) any act to obtain possession of property of the estate or of property from the estate or to exercise control over property of the estate;

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against property of the estate;

(5) any act to create, perfect, or enforce against property of the debtor any lien to the extent that such lien secures a claim that arose before the commencement of the case under this title;

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the debtor that arose before the commencement of the case under this title;

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the commencement of the case under this title against any claim against the debtor; and

(8) the commencement or continuation of a proceeding before the United States Tax Court concerning a tax liability of a debtor that is a corporation for a taxable period the bankruptcy court may determine or concerning the tax liability of a debtor who is an individual for a taxable period ending before the date of the order for relief under this title.

11 USC sec. 362 (a).

su propiedad. *Íd.*, sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. Lib. et al, 198 DPR 786, 787 (2017); Lab. Clínico, et al v. Depto. Salud et al, 198 DPR 790 (2017). Ello trajo consigo la paralización automática de aquellos pleitos que generalmente reclaman, como parte de los remedios, una compensación monetaria. Particularmente, los pleitos presentados – o que pudieron presentarse – contra el Gobierno de Puerto Rico antes de que se iniciara la quiebra. Requena Mercado et als. v. Policía, 205 DPR 285, 291 (2020). Véase, además, 48 USC sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922; Depto. de Hacienda v. COTIARI, 203 DPR 1049 (2020). El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de quiebra. Lacourt Martínez v. Jta. Lib. et al, *supra*.

Con la paralización se impide, entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de otra índole, que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se iniciara la quiebra. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010); 11 USC sec. 362.

En tales casos, se ha reconocido unánimemente que los tribunales locales poseen jurisdicción concurrente para evaluar si un caso está efectivamente paralizado o, si está sujeto a las excepciones de la referida paralización, en virtud del Título III de PROMESA. Requena Mercado et als. v. Policía, *supra*; Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., *supra*, pág. 792; Lacourt Martínez et al. v. JLBP et al., *supra*, pág. 788.

B.

Luego de que el Gobierno realizara una petición de quiebra, al amparo del Título III de PROMESA, el 18 de enero de 2022, la

Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste Fiscal que presentó el Gobierno de Puerto Rico y que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Para ello emitió, como parte del caso *In re Commonwealth of Puerto Rico*, Case. No. 17BK3283-LTS, el *Order and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority (Confirmation Order)*. Conforme a ello, se fijó el 15 de marzo de 2022 como fecha de efectividad de referido Plan de Ajuste.

En lo pertinente, el párrafo 59 del *Confirmation Order* (Orden de Confirmación), dispuso un mecanismo de interdicto en las reclamaciones, que establece lo siguiente:

59. Injunction on Claims.

Except as otherwise expressly provided in section 92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such other Final Order of the Title III Court that is applicable, **all Entities who have held, hold, or in the future hold Claims** or any other debt or liability that is discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan **are permanently enjoined, from and after the Effective Date, from (a) commencing or continuing, directly or indirectly, in any manner, any action or other proceeding (including, without limitation, any judicial, arbitral, administrative, or other proceeding) of any kind on any such Claim** or other debt or liability discharged pursuant to the Plan against any of the Released Parties or any of their respective assets or property, (b) the enforcement, attachment, collection or recovery by any manner or means of any judgment, award, decree, or order against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any encumbrance of any kind against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the extent provided, permitted

or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or pursuant to the common law right of recoupment, asserting any right of setoff, subrogation, or recoupment of any kind against any obligation due from any of the Released Parties or any of their respective assets or property, with respect to any such Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to all successors and assigns of the Released Parties and their respective assets and property. Notwithstanding the foregoing, without prejudice to the exculpation rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or this Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a non consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. (Énfasis nuestro).

Asimismo, la aludida Sección 92.2 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone en lo aquí pertinente, como sigue:

92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of Action:

(a) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all distributions and rights afforded under the Plan shall be, and shall be deemed to be, in exchange for, and in complete satisfaction, settlement, **discharge and release of, all Claims or Causes of Action against the Debtors and Reorganized Debtors that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date, relating to the Title III Cases**, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets, property, or interests of any nature whatsoever, **including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or Causes of Action**; provided, however, that, without prejudice to the exculpation rights set forth in Section 92.7 hereof, nothing contained in the Plan or the Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a grant of a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. Upon the Effective Date, the Debtors and Reorganized Debtors shall be deemed discharged and released from any and all Claims, Causes of Action and any other debts that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date (including prior to the Petition Date), and Claims of the kind specified in sections 502(g), 502(h) or 502(i) of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407, whether or not (a) a proof of claim based upon such Claim is filed or deemed filed under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such Claim is allowed under section 502 of the Bankruptcy

Code and PROMESA Section 407 (or is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim based upon such debt voted to accept the Plan. For the avoidance of doubt, nothing contained herein or in the Confirmation Order shall release, discharge or enjoin any claims or causes of action against PREPA arising from or related to PREPA-issued bonds, including, without limitation, Monoline-issued insurance pertaining thereto, and PREPA is not releasing any claims or causes of action against any non- Debtor Entity. Claims and causes of action against PREPA arising from or related to PREPA issued bonds, and releases against PREPA and its assets shall be addressed in PREPA's Title III case, including, without limitation, any plan of adjustment therein.

(b) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all Entities shall be precluded from asserting any and all Claims against the Debtors and Reorganized Debtors, and each of their respective Assets, property and rights, remedies, Claims or Causes of Action or liabilities of any nature whatsoever, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets and property, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or other obligations, suits, judgments, damages, debts, rights, remedies, causes of action or liabilities. **In accordance with the foregoing, except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, the Confirmation Order shall constitute a judicial determination, as of the Effective Date, of the discharge and release of all such Claims, Causes of Action or debt of or against the Debtors and the Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and 944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title III Case pursuant to Section 301 of PROMESA, and such discharge shall void and extinguish any judgment obtained against the Debtors or Reorganized Debtors and their respective Assets, and property at any time, to the extent such judgment is related to a discharged Claim, debt or liability.** As of the Effective Date, and in consideration for the value provided under the Plan, each holder of a Claim in any Class under this Plan shall be and hereby is deemed to release and forever waive and discharge as against the Debtors and Reorganized Debtors, and their respective Assets and property and all such Claims. [...] (Énfasis suplido).

Respecto al término "cause of action", la Sección 1.126 del Plan de Ajuste de la Deuda lo define como:

1.126 Causes of Action:

All claims, actions, causes of action, rights to payment, choses in action, suits, debts, dues, sums of money, accounts, reckonings, bonds, bills, specialties, covenants, contracts, controversies, agreements, promises, variances, trespasses, damages, judgments, remedies, rights of setoff, third-party claims, subrogation claims, contribution claims, reimbursement claims, indemnity claims, counterclaims, and cross claims (including, but not limited to, all claims for breach of fiduciary duty, negligence, malpractice, breach of contract, aiding and abetting, fraud, inducement, avoidance, recovery, subordination, and all Avoidance Actions) **that are pending or may be asserted against any Entity whether arising on or before the Effective Date, based in law or equity**, including, but not limited to, under the Bankruptcy Code, whether known, unknown, reduced to judgment, not reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured and whether asserted or assertable directly or derivatively, in law, equity or otherwise and whether asserted or unasserted as of the Effective Date. (Énfasis dado).

De otro lado, el párrafo 44 del *Confirmation Order* advierte sobre la oportunidad de presentar una solicitud de gastos administrativos a cualquier entidad que tenga una reclamación contra el Estado. Específicamente, la aludida sección dispone que:

44. Administrative Claim Bar Date. The last day to file proof of Administrative Expense Claims shall be ninety (90) days after the Effective Date, after which date, any Administrative Expense Claim, proof of which has not been filed, shall be deemed forever barred, and the Debtors and Reorganized Debtors shall have no obligation with respect thereto; provided, however, that no proof of Administrative Expense Claim shall be required to be filed if such Administrative Expense Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance with an order of the Court or (ii) with the written consent of the applicable Government Parties expressly granting such Administrative Expense Claim, (b) is a Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for the payment of taxes incurred by any of the Debtors during the period from and after the Commonwealth Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA Petition Date, as applicable, (e) **relates to actions occurring in the ordinary course during the period from and after the respective Debtor's petition date up to and including the Effective Date**, (f) relates to a Claim that is subject to the

provisions of the ACR Order, including, without limitation, "grievance claims" relating to any of the Debtor's collective bargaining agreements, or (g) is the subject of a pending motion seeking allowance of an administrative expense pursuant to section 503(b) of the Bankruptcy Code as of the entry of this Confirmation Order; and, provided, further, that any such proof of Administrative Expense Claim by a governmental unit shall remain subject to the rights and interests of the Debtors and Reorganized Debtors, as the case may be, and any other party in interest to interpose an objection or other defense to the allowance or payment thereof. (Énfasis nuestro)

Al respecto, la Sección 1.52 del Plan de Ajuste de la Deuda define una reclamación de gastos administrativos como:

1.52 Administrative Expense Claim:

A Claim against the Debtors or their Assets constituting a cost or expense of administration of the Title III Cases asserted or authorized to be asserted, on or prior to the Administrative Claim Bar Date, in accordance with sections 503(b) and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code arising during the period up to and including the Effective Date, and otherwise complying with applicable Puerto Rico law, including, without limitation, subject to the occurrence of the Effective Date, and except as provided in Section 3.5 hereof, Consummation Costs and PSA Restriction Fees; provided, however, that, under no circumstances shall an Administrative Expense Claim include the PBA Administrative Expense Claim.

En cuanto a las reclamaciones de gastos administrativos, la Sección 1.51 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone que:

1.51 Administrative Claim Bar Date:

Unless otherwise ordered by the Title III Court, the date established by the Title III Court and set forth in the Confirmation Order as the last day to file proof of Administrative Expense Claims, which date shall be no more than ninety (90) days after the Effective Date, [...]

Cónsono a lo anterior, el *Notice of (A) Entry of Order Confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et al. Pursuant to Title III Of PROMESA and (B) Occurrence of the Effective Date* presentado por la Junta de Supervisión Fiscal el 15 de marzo de 2022, en el caso 17-03283-LTS, estableció como fecha límite el 13 de junio

de 2022 para que los acreedores presentaran una solicitud de pago por Reclamaciones de Gastos Administrativos al amparo del párrafo 44 del *Confirmation Order*.

III.

La apelante, en síntesis, alega que en el presente caso no le aplica el Plan de Ajuste pues el salario que la empleada reclama es del año 2021 en adelante, fecha posterior a la radicación de la quiebra. Mencionó que la protección en quiebra solo aplica a deudas anteriores a la fecha de la petición, es decir, el 3 de mayo de 2017. Agregó que el presente caso se trata de un pleito laboral sobre salarios y esclavitud para la reinstalación de salarios dejados de percibir, que le fueron denegados como medida disciplinaria. A su vez, indicó que este pleito no está paralizado en virtud de los acuerdos aprobados por la Corte de Distrito en el documento intitulado "*Stipulation Between the Commonwealth of Puerto Rico and CBA Counterparties Regarding Certain Grievance and Arbitration Procedures*" aprobado el 7 de marzo de 2018. Expuso, a su vez, que la orden de paralización automática del *Confirmation Order* tampoco le aplica porque esta es únicamente para casos bajo la ley PROMESA, sobre deudas anteriores a su radicación.

El Departamento, por su parte, aduce que la aludida estipulación de 2018 fue suscrita antes de que entrara el Plan de Ajuste. Que esta vinculaba únicamente a las uniones que formaron parte de dicho acuerdo y se refería a casos *pre-petition*. Agregó que el presente caso no se trata sobre quejas, agravios o arbitraje que hubiera sido tramitado por la unión al amparo de un convenio colectivo, por tanto, referido acuerdo no cobija de modo alguno a la apelante. Aseveró, a su vez, que en el presente caso la demandante alega que ha continuado trabajando durante más

de un año sin recibir sueldos o beneficios, lo que la ha sometido a una servidumbre involuntaria, en represalia por haber informado al patrono su percepción de que se le adeudaban sueldos y beneficios. Indicó, por tanto, que se trata de un caso *post-petition* que solo contiene reclamaciones monetarias. Ante ello, quedó afectado por el interdicto permanente. Evaluamos.

De acuerdo con las disposiciones citadas en la exposición del derecho, el *injunction* que provee del párrafo 59 del *Confirmation Order* es aplicable a todas las entidades con reclamaciones pasadas, presentes o futuras contra el Gobierno. Esta paralización aplica desde y después de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste a cualquier procedimiento judicial, arbitral, o administrativo sobre cualquier reclamación, deuda o responsabilidad contra el Gobierno.

A su vez, la Sección 92.2 del referido Plan, incorporada al antes mencionado párrafo 59 del *Confirmation Order* provee, en esencia, para la descarga y relevo de las reclamaciones o causas de acción, contra los deudores, que surjan **antes** de la fecha de efectividad del Plan (15 de marzo de 2022). Ello incluye cualquier interés acumulado de tales reclamos desde y luego de la fecha de petición. Además, establece que, a partir de la fecha de efectividad del plan, la Orden de Confirmación constituye una determinación judicial que releva al deudor de las reclamaciones descargadas.

Así pues, el *injunction* permanente dispuesto en el *Confirmation Order*, incluye aquellas causas que surgieron después de la fecha de petición de la quiebra (*post-petition*), pero antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste. Este caso cumple con estos criterios.

El **3 de mayo de 2017** la Junta de Supervisión y Administración Financiera presentó una petición de quiebra. El 18 de enero de 2022, el Tribunal Federal emitió un *Confirmation Order* mediante el cual se aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda, efectivo al **15 de marzo de 2022**. El **12 de abril de 2022** la señora Landrau Torres instó una querrela contra el Gobierno en la cual reclamó, en síntesis, que, desde el **15 de abril de 2021**, el patrono dejó de pagarle su salario, dietas, millaje y beneficios de licencias. Alegó represalias por denunciar su situación laboral. Por lo anterior, reclamó una compensación económica y sus respectivas penalidades, más la indemnización por daños y perjuicios. Como vemos, este pleito conlleva reclamaciones monetarias contra el Estado, el cual requiere desembolso del fisco para resarcir la reclamación.

De otro lado, la causa surgió luego de la petición de quiebras y antes de la efectividad del Plan de Ajuste. Por tal razón, opera con toda fuerza y vigor la paralización que provee el párrafo 59 del *Confirmation Order*, tal como el foro primario lo estableció en la sentencia que revisamos. Consecuentemente, el párrafo 44 del *Confirmation Order* provee como remedio la otorgación de los gastos administrativos, en los casos que aplique. Estos se debían reclamar dentro del periodo de noventa días de la fecha de efectividad del Plan, al 13 de junio de 2022.

IV.

Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la *Sentencia* apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones